

INFORME DE ASESORÍA EXTERNA SENADORA XIMENA RINCÓN
ASESOR EXTERNO: PAULINA GÓMEZ BARBOZA

MARZO 2023

- I. PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYE DE LOS BENEFICIOS DE REDUCCIÓN DE CONDENA, LIBERTAD CONDICIONAL Y BENEFICIOS PENITENCIARIOS A LOS CONDENADOS POR DELITOS COMETIDOS CONTRA MIEMBROS DE LAS POLICÍAS, DE GENDARMERÍA DE CHILE, FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO y DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE SE ENCUENTREN EJERCiendo FUNCIONES DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO MODIFICANDO LA LEY N°19.856 CREA UN SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS CONDENADOS SOBRE LA BASE DE LA OBSERVACIÓN DE BUENA CONDUCTA Y EL DECRETO LEY N° 321 QUE ESTABLECE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA LAS PERSONAS CONDENADAS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

I. Aumento de la Delincuencia y de la violencia criminal

Chile enfrenta el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia". Así de categórico fue el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para referirse al aumento de los delitos de alta connotación social que se registran en el país.

El Ministerio del Interior informó un importante aumento de los delitos ocurridos durante el año 2022. Según la cartera comandada por la ministra Carolina Tohá, durante el año pasado, los delitos aumentaron un 44,6% en comparación al 2021.

La estadística anual es elaborada por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), organismo dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en donde se da cuenta los casos policiales informados tanto a Carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI), que corresponden a la suma de denuncias y detenciones por delitos flagrantes.

De acuerdo a su último informe, los delitos que más aumentaron durante el 2022 en comparación al 2021, son delitos relativos al robo con violencia o intimidación, que creció un 63,1%; seguido del robo por sorpresa, que aumentó en 61,2%. A estos, le sigue el robo en lugar no habitado, que creció un 56,4% durante el año pasado.

En cuanto a las denuncias y detenciones, durante el año 2022, aumentó un 46,1% la cantidad de denuncias a nivel país en relación a la medición anterior. Por su parte, también hubo una mayor cantidad de detenciones, logrando aumentar un 35,6% respecto al año 2021.

Otro punto importante que resalta el informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es la crisis que se vive en la zona norte del país. Si bien, en todas las regiones de Chile se

muestran aumentos en la tasa de delitos de mayor connotación social (homicidio, lesiones, violación, robo con fuerza y robo con violencia), los casos se dispararon principalmente en la macrozona norte.

En ese sentido, las regiones donde se registró un mayor crecimiento de delitos de mayor connotación social son Atacama, donde aumentaron un 63,9%; seguida de Arica y Parinacota, con un crecimiento del 59,3% en hechos delictivos de estas características y, más atrás le sigue la región de Valparaíso (+58,1%).

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, informó que en el 2022 se realizaron 8.892.356 procedimientos, lo que se traduce a 741.030 en promedio por cada mes, 24.363 por día y 16,9 por minuto.

Por otro lado, respecto de los homicidios, el balance de fin de año reveló que los homicidios en Chile aumentaron un 43% en comparación con el 2021. La información entregada por la policía de Carabineros revela que el 2022 se registraron 842 homicidios a nivel nacional, 43% más que el 2021. La institución detalló que la tasa de afectados fue de 4,6 delitos por cada 100 mil habitantes, y que, en la región de Tarapacá, ubicada al norte de Chile, el indicador subió a 10,3.

II. Violencia contra miembros de las policías y persecutores penales.

Dentro de este contexto, el año pasado 2022, se ha constituido, a la fecha, como el período con más homicidios de carabineros en dos décadas. Particularmente este 2022, ha sido en extremo violento con los funcionarios de la institución: entre enero y octubre se registraron 942 policías agredidos, y 7 resultaron fallecidos. Este último antecedente es manejado en la policía uniformada como algo inédito, pues en 4 de ellos se trata de fallecimientos por acciones de terceros con dolo, es decir, homicidios directos, y que no corresponden a accidentes de tránsito u otros infortunios durante sus servicios.

Desde la institución advierten que nunca, desde el 2000 en adelante, se había producido esta cifra de homicidios de integrantes de la policía uniformada atribuible a terceros, algo que los tiene con tristeza y rabia.

En tanto, en 2019 no hubo homicidios contra Carabineros, y en 2018 solo se contabilizó uno; en 2017, dos, y en 2016, también dos. Misma tendencia se repite hacia atrás, donde la gran mayoría de los decesos es por accidentes de tránsito e incendios.

Dos casos que conmocionaron fuertemente a la institución y al a ciudadanía ocurrieron en mayo y junio del 2022. El primero tuvo lugar en Chillán, cuando el carabinero Breant Rivas (23 años) murió a manos de un grupo de delincuentes, quienes lo atacaron cuando intentaba hacer una fiscalización por drogas. El segundo homicidio fue el del cabo David Florido (33 años), quien fue víctima de un disparo en una peluquería, al querer realizar una fiscalización por porte ilegal de arma.

El general director de la Institución Ricardo Yáñez. En el responso del sargento Retamal, el jefe de la policía uniformada advirtió que “esto espero que sea un punto de inflexión en el cual todos, y cada uno de los actores intervinientes en el sistema penal, hagamos un esfuerzo mayor para que los responsables de agredir a quienes defienden a la ciudadanía estén en la cárcel, y no al revés”.

Por su parte, en el informe del Observatorio del Narcotráfico 2019-2020 la Fiscalía Nacional¹ advierte que en materia de narcotráfico y otras formas de crimen organizada ha instalado como una conducta dominante en todo el territorio nacional, entre otras, el uso intensivo de la violencia el Ministerio Público en el último informe de año 2022 del Observatorio del Narcotráfico “Tendencias, Amenazas y Propuestas frente al Narcotráfico en Chile” da cuenta que no sólo las instituciones policiales se encuentran en peligro ante las nuevas y más graves formas de violencia del crimen organizado, sino que también su institución, dado que han constatado la inusual violencia utilizada por estos grupos de nacionalidad, asociada al uso de armas de fuego de alto calibre y dedicados al secuestro, la extorsión de pequeños comerciantes o en el ámbito del comercio sexual de ciudadanas extranjeras así como los intentos de instalación en nuestro país de las mayores organizaciones criminales de América.

Señalan que en distintos países de Latinoamérica ya se ha visto concretada “una amenaza que estuvo latente por años”. El mes de mayo del 2022, en menos de 30 días fueron asesinados tres fiscales. El primero de ellos, Marcelo Pecci, fiscal antidrogas del Paraguay, asesinado el 10 de mayo. Le seguiría Luz Marina Delgado, fiscal antidrogas del Ecuador, asesinada el 25 del mismo mes, y luego, Karen Almendares, fiscal de Honduras, asesinada cinco días después. Luego, la muerte del fiscal de Ecuador, Federico Estrella, asesinado el 15 de agosto del 2022 quien también investigaba casos de drogas.

En diciembre del año pasado, un supuesto accidente de tránsito registrado durante la madrugada en la Ruta 5 Norte, en la Región de Coquimbo, terminó con tres detectives de la Policía de Investigaciones y dos imputados fallecidos, detenidos en el marco de una investigación por tráfico de drogas². Los imputados eran una mujer chilena y un ciudadano extranjero. Los detectives se trasladaron hasta la comuna de San Fernando, en la sexta región, para realizar una entrega vigilada que culminó con un decomiso de más de 11 mil gramos de cannabis sativa. Finalizado con éxito el procedimiento, el Ministerio Público calameño ordenó el traslado de los aprehendidos hasta la segunda región para que fueran puestos a disposición del Tribunal de Garantía de la comuna, donde se iba a formalizar su detención. Se investigan las causas del hecho

A partir de tales hechos, el Ministerio Público señala que, es necesario que nuestra legislación se prepare para mayores desafíos y también riesgos, especialmente de quienes deben dirigir investigaciones penales contra el crimen organizado y las policías que les sirven de apoyo.

Las policías y los fiscales son claves para la satisfacción de una demanda ciudadana por mayores acciones contra la criminalidad, que debe tener como contrapartida, la necesaria protección a quienes deben encabezarla.

En esa línea de ideas, los autores de esta iniciativa nos preguntamos si resulta ¿razonable que quienes cometen delitos graves en contra de estos miembros de nuestra institucionalidad puede ser tratados del mismo modo que cualquier condenado por delitos comunes en contra de personas que no revisten dicha autoridad?

¹ TENDENCIAS, AMENAZAS Y PROPUESTAS FRENTE AL NARCOTRÁFICO EN CHILE. OBSERVATORIO DEL NARCOTRÁFICO. DICIEMBRE 2022, página 11

² Fuente: Emol.com - <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/12/02/1080093/pdi-entregan-detalles-procedimiento-fallecidos.html>

Particularmente, nos cuestionamos que quienes han sido condenado a penas privativa de libertad por atentar contra la vida , la integridad física y psíquica , o la libertad de miembros de las policías o de persecutores penales, puedan acceder a rebajas de sus condenas o a beneficios que les permiten estar en libertad, antes del tiempo que la justicia determinó debían estar privados de libertad , después de que policías y fiscales arriesgan su vida, integridad o libertad para encontrarlos, capturarlos , ponerlos a disposición de la justicia, acusarlo y conseguir una condena.

Nuestra respuesta categórica es no.

III. De los Beneficios:

1. Reducción del tiempo de condena.

La ley N° 19.856 crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta establece en sus artículos 2° y 3° que “la persona que durante el cumplimiento efectivo de una condena privativa de libertad, hubiere demostrado un comportamiento sobresaliente, tendrá derecho a una reducción del tiempo de su condena equivalente a dos meses por cada año de cumplimiento” y que dicho beneficio, incluso se amplía, a partir de la mitad de la condena, a tres meses de rebaja por cada año de privación de libertad.

El artículo 17 de dicha norma, sin embargo, establece límites a la aplicación de los beneficios, los que no tendrán lugar en caso alguno, cuando se dieren una o más de las siguientes circunstancias:

- a) La persona privada de libertad hubiere quebrantado su condena, se hubiere fugado, evadido o intentado fugarse o evadirse;
- b) El condenado hubiere incumplido las condiciones impuestas durante el régimen de libertad condicional;
- c) La persona hubiere delinquido durante el cumplimiento de su condena, o estando en libertad provisional durante el proceso respectivo;
- d) Se trate de personas condenadas a presidio perpetuo, sea simple o calificado;
- e) El condenado hubiere cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo, o alguno de los delitos perpetrados en contra de una víctima menor de edad, sancionados en los artículos 141, inciso final, y 142, inciso final, ambos en relación con la violación; los artículos 150 B y 150 E, ambos en relación con los artículos 361, 362 y 365 bis; los artículos 361, 362, 363, 365 bis, 366, 366 bis, 366 quáter, 367, 367 ter, 367 quáter y 367 septies; el artículo 411 quáter, en relación con la explotación sexual; y el artículo 433, N° 1, en relación con la violación, todos del Código Penal, a

menos que en la sentencia condenatoria se hubiere aplicado a su respecto la circunstancia atenuante prevista en el artículo 73 de dicho Código;

- f) El condenado hubiere obtenido el beneficio establecido en esta ley con anterioridad, y
- g) La condena hubiere sido dictada considerando concurrente alguna de las circunstancias agravantes establecidas en los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.

Si bien , los casos de delitos mas graves atendido el bien jurídico lesionado a los que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo, se encuentran excluidos de este beneficio en la letra e) del artículo 17, el legislador en el último tiempo, incorporó una nueva limitación a dicho beneficio atendiendo no sólo la gravedad de los ilícitos - como son los delitos de violencia sexual- sino teniendo consideración particular a los sujetos ofendidos con su perpetración de esos delitos: niños, niñas y adolescentes.

Es así como el 28 de enero del 2022 se aprobó la ley N ° 21.421 que excluye del beneficio de reducción de condena a quienes hayan cometido delitos de carácter sexual contra personas menores de edad. En la misma línea de reforzar la protección a las personas respecto de persona que delinquen que son consideradas un peligro para la sociedad, el 24 de agosto del año 2022, se publicó la Ley N° 21. 483 que modificó el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia, adultos mayores y personas con discapacidad atendiendo a su especial vulnerabilidad. Las modificaciones tuvieron por objeto aumentar penas, incorporar agravantes, excluir los grados mínimos de las escalas de determinación de las penas disponibles para los jueces.

En este punto la presente moción propone hacer otras excepciones en razón del sujeto pasivo del delito, y excluir de ese beneficio a los condenados que hayan cometido delitos en contra de miembros de la policía que se encontraren en ejercicio de sus funciones y de miembros de gendarmería y fiscales, respecto de los siguientes delitos:

1. Homicidios (Artículo 416 del Código Militar y 391 del Código Penal)
2. Castraciones y Mutilaciones (Artículo 416 bis del Código Militar, 395 y 396 del Código Penal)
3. muerte o lesiones graves de personas en razón del cargo que desempeñe, haya desempeñado o esté llamada a desempeñar. (Artículo 5° letra a) inciso 2 y 5° letra b de la ley N ° 12.927 sobre Seguridad del Estado)
4. Privación de libertad de una persona con el objeto de alterar la seguridad pública o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad privaren de libertad, en razón del cargo que una persona desempeñe, haya desempeñado o esté llamada a desempeñar, o si la víctima fuere cónyuge, ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad de ésta. (Artículo 5° letra b) de la ley N ° 12.927 sobre Seguridad del Estado)
5. Secuestros (Artículo 141 del Código Penal)
6. Heridas, golpes o maltratos a Carabineros (Artículo 416 bis del Código Militar)

7. Lesiones graves y menos graves (Artículos 397 y 399 del Código Penal)
8. Atentados contra la autoridad (Artículos 261 y 262 del Código Penal)
9. Amenazas (Artículos 417 del Código Militar, 296 y 297 del Código Penal)

2. Libertad Condicional

Por su parte, el Decreto Ley N ° 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, establece en su artículo 2° que “toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá postular al beneficio de libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva, o los 4° y 20 años de presidio efectivo si su condena es de presidio perpetuo calificado y simple, respectivamente.

2) Haber observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga nota "muy buena", de conformidad al reglamento de este decreto ley, en los cuatro bimestres anteriores a su postulación. En caso de que la condena impuesta no excediere de quinientos cuarenta y un días, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota "muy buena" durante los tres bimestres anteriores a su postulación.

3) Contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinserirse adecuadamente en la sociedad. Dicho informe contendrá, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad de la persona condenada, dando cuenta de la conciencia de la gravedad del delito, del mal que éste causa y de su rechazo explícito a tales delitos.

Con todo, la ley contempla requisitos más altos en el artículo 3° atendida la gravedad de los delitos: parricidio, femicidio, homicidio simple, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, delitos de carácter sexual y tráfico de estupefacientes. Y también, en consideración del sujeto ofendido, a saber: “homicidio de miembros de las policías, de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile y de Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”, a quienes se les exige para poder postular haber cumplido dos tercios de la pena.

En este caso, sin embargo, no parece consecuente con la necesidad de dar mayor protección a policía, gendarmes y fiscales, no hacer un distingo entre quienes delinquen sin violentar a las fuerzas de seguridad del país ni a miembros del sistema de persecución del delito, y quienes los hacen violentándolos sin respeto alguno a nuestra institucionalidad. En este último caso, estimamos que deben cumplir su pena a cabalidad, sin posibles salidas al medio libre en períodos más breves todos los

condenados por delitos en contra de sus vidas, integridad física y psíquica, libertad, o atentan contra su autoridad. A saber:

1. Homicidios (Artículo 416 del Código Militar y 391 del Código Penal)
2. Castraciones y Mutilaciones (Artículo 416 bis del Código Militar, 395 y 396 del Código Penal)
3. muerte o lesiones graves de personas en razón del cargo que desempeñe, haya desempeñado o esté llamada a desempeñar. (Artículo 5° letra a) inciso 2 y 5° letra b de la ley N ° 12.927 sobre Seguridad del Estado)
4. Privación de libertad de una persona con el objeto de alterar la seguridad pública o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad privaren de libertad, en razón del cargo que una persona desempeñe, haya desempeñado o esté llamada a desempeñar, o si la víctima fuere cónyuge, ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad de ésta. (Artículo 5° letra b) de la ley N ° 12.927 sobre Seguridad del Estado)
5. Secuestros (Artículo 141 del Código Penal)
6. Heridas, golpes o maltratos a Carabineros (Artículo 416 bis del Código Militar)
7. Lesiones graves y menos graves (Artículos 397 y 399 del Código Penal)
8. Atentados contra la autoridad (Artículos 261 y 262 del Código Penal)
9. Amenazas (Artículos 417 del Código Militar, 296 y 297 del Código Penal)

3. Beneficios Penitenciarios.

Por su parte, el Decreto Supremo N ° 518, de 21 de agosto de 1998, Reglamento Penitenciario, en su artículo 96 establece permisos de salida al medio libre como beneficios que forman parte de las actividades de reinserción social y confieren a quienes se les otorgan gradualmente, mayores espacios de libertad. Dichos permisos de salida son los siguientes: a) la salida esporádica; b) la salida dominical; c) la salida de fin de semana, y d) la salida controlada al medio libre.

Los permisos de salida solo pueden concederse a quienes hayan demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social, siendo fundamental el informe psicológico y un informe social. El informe psicológico debe dar cuenta de la i) conciencia de delito, ii) del mal causado con su conducta y iii) de la disposición al cambio.

Entre otros requisitos que debe cumplir el interno para la solicitud de los permisos de salida dominical, de fin de semana y controlada al medio libre, son: Registrar muy buena conducta en los tres bimestres (seis meses) anteriores a su postulación. No obstante, se debe examinar la conducta del postulante durante toda su vida intrapenitenciaria a fin de constatar si, con anterioridad a los tres bimestres referidos, registra infracciones disciplinarias graves a considerar antes de conceder el beneficio; haber asistido regularmente y con provecho a la escuela del establecimiento, salvo que el postulante

acredite dificultades de aprendizaje o estudios superiores a los que brinda el establecimiento o se encuentre eximido; haber participado en forma regular y constante en las actividades programadas en la unidad, como capacitaciones, talleres, culturales y recreativas, y tener la posibilidad cierta de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios o de las redes sociales.

El cumplimiento de los requisitos formales exigidos para estos beneficios solo da derecho al interno a solicitar el permiso de salida y no a su concesión.

El artículo 109 de este reglamento señala que antes de la concesión de cualquiera de los permisos, deberán analizarse por el Consejo Técnico, cuando corresponda, y en todo caso por el Jefe del Establecimiento, los antecedentes que lo ameriten: la gravedad de los delitos cometidos; la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputaren y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal y la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y en general cualquier referencia relativa a la confiabilidad del beneficiario que permitan presumir que no quebrantará su condena.

Y el artículo 109 bis, por su parte, señala que , para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, “se entenderá que son especialmente graves los delitos de homicidio, castraciones, mutilaciones, lesiones graves gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, violación, abuso sexual, secuestro, sustracción de menores, tormentos o apremios ilegítimos, asociación ilícita, inhumaciones y exhumaciones, cualquiera haya sido la denominación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

La facultad para la concesión, suspensión o revocación de los permisos a un interno es privativa del Jefe de Establecimiento Penitenciario, sin perjuicio de que debe existir informe favorable del Consejo Técnico.

Y en los casos de los delitos que el reglamento estima como “especialmente graves”, se requerirá, además del informe favorable del Consejo Técnico y de la aprobación de la solicitud por parte del Jefe del Establecimiento, la ratificación de esta última por el Director Regional de Gendarmería respectivo.

Lo llamativo de esta regulación es que , en estricto rigor, no hay prohibición alguna para conceder estos permisos de salida al medio libre para aquellas personas que cometan delitos graves, ni siquiera para condenados que hayan victimizado a personas por su especial vulnerabilidad o su investidura y función social merecen una mayor protección, como es el caso de los niños niñas y adolescentes, persona adultas mayores , con discapacidad o bien , miembros de las policías, Gendarmería o Fiscales.

De este modo, aun cuando condenados por delitos de esa gravedad o que han victimizado a personas a quienes la ley protege de manera especial, no tengan acceso

al beneficio de salida al medio libre que significa la libertad condicional establecida por el Decreto Ley N ° 321 sino hasta cumplidos mínimo la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva, o 40 y 20 años de presidio efectivo si su condena es de presidio perpetuo calificado y simple, respectivamente, en teoría podrían acceder al medio libre a través de este tipo de permisos reglamentarios, de carácter administrativo.

Ello, a no dudar, importa una grave inconsistencia legislativa, toda vez que los condenados se hallan privados de libertad por sentencia firme de un tribunal de justicia, el legislador ha limitado e impedido su acceso al medio libre por un largo periodo antes de darles acceso a solicitar un posible beneficio de libertad condicional, y sin embargo, por vía de beneficios penitenciarios eventualmente podrían acceder a horas y días de libertad en virtud de un simple acto administrativo.

En razón de las consideraciones anteriores, los suscritos vienen en proponer el siguiente Proyecto de Ley.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.

1) Modifíquese la ley N°19.856 que Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de Buena Conducta, en el siguiente sentido:

Agréguese una letra f) nueva en el artículo 17, pasando la letra f) a ser g) y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“f) El condenado que hubiere cometido en contra de miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, de personal de Gendarmería o Fiscales del Ministerio Público y de miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren ejerciendo funciones de control del orden público, alguno de los delitos sancionados en los artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417 del Código de Justicia Militar, artículos 141, 261, 262, 296, 297, 391, 395, 396, 397 y 399 del Código Penal, y artículos 5° letra a, inciso 2°, y 5° letra b de la ley N ° 12.927, sobre Seguridad del Estado, que no se encontraren incluidos en la hipótesis de la letra d) de esta norma, a menos que en la sentencia condenatoria se hubiere aplicado a su respecto la circunstancia atenuante prevista en el artículo 73 del Código Penal”.

2) Modifíquese el Decreto Ley N ° 321 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad del siguiente modo:

a) Agréguese un inciso segundo en el artículo 2° del siguiente tenor:

“Con todo, no podrán optar a este beneficio los condenados por delitos cometidos en contra de miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, de personal de Gendarmería o Fiscales del Ministerio Público y de miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren ejerciendo funciones de control del orden público”

b) Elimínese en el inciso tercero del artículo 3° la frase:

“homicidio de miembros de las policías, de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile y de Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones”

c) Agréguese un artículo 11 bis ° del siguiente tenor:

“No podrán acceder a beneficios penitenciarios consistentes en permisos de salida, sean esporádicas, dominicales, fines de semana, salida controlada al medio libreo cualquier otro de la misma naturaleza, los condenados por delitos cometidos en contra de miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, de personal de Gendarmería o Fiscales del Ministerio Público y de miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren ejerciendo funciones de control del orden público”.

II. MINUTA PROCEDIMIENTOS ANTE VIOLENCIA ESCOLAR

Se revisan las diferentes hipótesis legales porque no hay un tratamiento integral de la violencia en las escuelas.

1. MEDIDAS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PROCEDIMIENTO AULA SEGURA.

En 2018 fue publicada la Ley N° 21.128, también denominada “Aula Segura”. Esta nueva normativa viene a modificar el DFL N° 2 de 1998 que regula a los establecimientos que reciben subvención del Estado, en lo que dice relación con el procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa.

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando:

- Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento, o
- Afecten gravemente la Convivencia Escolar.

Conforme a dicha ley , “siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad

educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, **que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos**, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

Ello, sin perjuicio del acoso escolar, que es el acto de agresión u hostigamiento, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional.

Esta ley nace del requerimiento de los propios Directores, docentes y miembros de la comunidad, esto porque principalmente la Superintendencia de Educación revocaba las sanciones (expulsiones, suspensiones, cancelación de matrículas) aplicadas por los liceos o colegios, por no cumplir con un debido proceso, o considerar dobles sanciones al aplicar el establecimiento la medida disciplinaria de suspensión al alumno, mientras se revisaba el proceso de expulsión y los tiempos extensos que lleva la revisión de este proceso. Hecho que ocurría en virtud de lo dispuesto en el DFL N° 2/1998 (conocido como el DFL de Subvenciones) que contempla en su artículo 6 letra una norma para poder expulsar alumnos, pero de carácter muy genérico.

No obstante seguir vigente esa norma, la ley de Aula Segura precisó causales que se consideran casos graves y amplió su aplicación o solo a alumnos, también a apoderados, profesores, asistentes y directores.

Para que sea aplicable esta ley, que permite suspensión y cancelación, se requiere que:

- 1) **Que el Reglamento de Convivencia tipifique las conductas y sanciones y establezca un procedimiento sancionatorio;**
- 2) **Que se garantice un debido proceso; y**
- 3) **Que el colegio haya aplicado, en los hechos, su normativa disciplinaria.**

La misma ley estableció un procedimiento legal, más acotado, cuya duración no puede ser superior a 10 días, se puede aplicar la medida cautelar de suspensión y de su resolución los padres y apoderados pueden solicitar la reconsideración en un plazo de 5 días.

2. VÍA ADMINISTRATIVA ANTE AUTORIDADES DE EDUCACIÓN

Es un procedimiento pensado más bien para apoderados y los propios alumnos, con el fin de fiscalizar que el establecimiento haya cumplido con lo que la ley le exige. Lo que no obsta a que “la comunidad educativa en su conjunto lo utilice”, con el fin de implicar también a la Superintendencia de Educación y MINEDUC en el tema, cuando las medidas que la ley dispone para adoptar dentro del establecimiento no han surtido efecto.

- a) De acuerdo a la normativa de la Superintendencia, lo primero es que los directamente afectados (alumnos, apoderados, docentes, etc.) hayan informado o denunciado esta situación al establecimiento, a fin de que éste, active su protocolo de actuación definido en su Reglamento Interno para este tipo de casos y adopte las medidas tanto preventivas como correctivas.
- b) Dice la ley que, si luego de exponer la situación en el establecimiento, las autoridades del mismo no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio Reglamento Interno disponga, los interesados pueden denunciar ante la Superintendencia de Educación, para dar curso a la revisión de antecedentes. Para realizar la denuncia debe ingresar a la página web www.supereduc.cl o dirigirse en forma presencial a la oficina de atención de público regional de la Superintendencia de Educación.
- c) Si en cambio, las autoridades del establecimiento adoptaron las medidas que manda la ley, se sugiere preparar un documento con las medidas adoptadas en cada caso grave denunciado.
- d) ¿Cuáles son las competencias de la superintendencia de educación ante casos de violencia escolar? Fundamentalmente fiscaliza que el establecimiento haya tomado las medidas que la ley le otorga.

Así, ante la denuncia, la Superintendencia de Educación solicitará antecedentes al establecimiento, y si el establecimiento no adoptó las medidas contempladas en su Reglamento Interno o éstas han sido insuficientes para eliminar los actos de violencia escolar, derivará los antecedentes a la Unidad de Fiscalización para su revisión. O sea, el establecimiento será fiscalizado en su actuación, por eso deben tener un buen reglamento que incluya las sanciones a quienes realicen hechos graves, y haber aplicado las sanciones.

Si se detectan posibles vulneraciones a la normativa educacional, se dará origen a un Proceso Administrativo. Una vez notificados los cargos al Sostenedor, él tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos y los medios de prueba que estime conveniente a la Unidad de Fiscalía, para probar que hizo todo lo que la ley le manda.

3. PROCEDIMIENTO ANTE LAS AUTORIDADES PENALES.

Es necesario recordar que sin perjuicio de las vías administrativas, es deber de Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales están obligados por ley a denunciar los delitos que afectaren a niños, niñas y adolescentes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento (art. 175 Código Procesal Penal). Por ejemplo, delitos de amenazas, lesiones, maltrato corporal relevante que no deje lesiones, trato degradante, tráfico de estupefacientes, agresiones sexuales, etc.

4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES POR VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NNA.

a) Si bien existe un procedimiento judicial de adopción de medidas de protección de derechos ante los Tribunales de familia, los objetivos de ese procedimiento no sirven para este caso, pues está enfocado en las familias, debería denunciarse a quienes vulneran los derechos de los NNA del colegio, el procedimiento debe hacerse por cada niño agredidos y se citaría a las familias de los agresores, además que las agresiones que ellos cometen según los relatos de la comunidad educativa, exceden de simples vulneraciones, y más bien tienen ribetes de delitos. Por otro lado, las medidas de protección a las que se podría acceder por esa vía no irían más allá del envío a atenciones psicológicas que serán derivadas a las redes del Servicio de Atención Especializada de la Niñez, y se caracteriza por no tener oferta disponible, y no resultar eficaces.

b) La ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, sin embargo, contempla un Procedimiento de Tutela Administrativa de Derechos , en su artículo 60 que señala que :

“ Todo niño, niña o adolescente, o **cualquier persona en su nombre e interés**, podrá interponer una acción de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes **ante la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia**, las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia o las Oficinas Locales de la Niñez, en razón de riesgos, amenazas o vulneraciones que afecten los derechos y garantías que a ellos corresponden, con el fin de que los órganos competentes tomen las medidas necesarias para hacer cesar la afectación de sus derechos.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia regulará el procedimiento necesario para garantizar un debido proceso y la efectiva cautela de los derechos”.

Se dictó el DECRETO 11 APRUEBA REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE TUTELA ADMINISTRATIVA DE DERECHOS PARA GARANTIZAR UN DEBIDO PROCESO

Y LA EFECTIVA CAUTELA DE ESTOS, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY N° 21.430. Esta acción se puede interponer a favor de **“un colectivo de NNA”**. Tiene sin embargo un pero inicial: **Si bien la ley señala que se puede acudir a la SEREMIA del MDS, luego indica que se derivará y tramitará ante la Oficina Local de la Niñez competente.** En este caso debiese ser la Oficina que corresponda al lugar de domicilio del niño, niña y adolescente, o el lugar de ocurrencia del hecho de amenaza o vulneración que ocasiona la apertura del procedimiento.

Pero, de acuerdo al Decreto 17 que ESTABLECE LA INSTALACIÓN DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA NIÑEZ QUE SE INDICAN PARA EL AÑO 2022, en el Maule hay 13 Oficinas, ninguna en Talca.

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	COLCHAGUA	PUMANQUE
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	COLCHAGUA	SANTA CRUZ
MAULE	TALCA	PELARCO
MAULE	TALCA	PENCAHUE
MAULE	TALCA	RÍO CLARO
MAULE	CAUQUENES	PELLUHUE
MAULE	CURICÓ	HUALAÑÉ
MAULE	CURICÓ	RAUCO
MAULE	CURICÓ	SAGRADA FAMILIA
MAULE	CURICÓ	TENO
MAULE	CURICÓ	VICHUQUÉN
MAULE	LINARES	COLBÚN
MAULE	LINARES	RETIRO
MAULE	LINARES	VILLA ALEGRE
MAULE	LINARES	YERBAS BUENAS

No obstante, según Ley de Garantías (artículo 65) el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios con una o más municipalidades para desarrollar las mismas funciones de las Oficinas Locales de la Niñez (“promoción, prevención de vulneraciones de derechos y la protección general”) que corresponde a los Municipios según letra m) del artículo 4 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá suscribir convenios de colaboración y/o transferencias con otros organismos públicos.

c) Recurso de Protección.

La acción constitucional siempre es una posibilidad para denunciar vulneraciones a la integridad física y psíquica, pero las Cortes exigen que se haya agotado la vía administrativa y que las autoridades no hayan dado ninguna respuesta o una no satisfactoria. Y en todo caso, sus resoluciones

sólo están enfocadas en constatar las vulneraciones y ordenar a la Administración que tome las medidas pertinentes.

III. MINUTA MOCION QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS NACIDOS EN GESTACIÓN SUBROGADA.

Problema que aborda

1. La fertilización in vitro con transferencia del embrión en una tercera persona es un hecho, en Chile los médicos la realizan cuando es altruista, y por lo mismo, es ineludible hacerse cargo de la inadecuación legal que afecta a los niños y niñas en orden a definir su auténtica identidad.
2. La moción no tiene por objeto autorizar ni prohibir expresamente los pactos de maternidad subrogada, ni establecer nada respecto de su validez, tampoco regular su posible realización, pues entendemos que esa es una discusión de otro orden, desde luego contractual, pero a la vez, atravesada por decisiones de carácter ético político, que nuestro Estado no ha asumido hasta la fecha.
3. No obstante, los niños y niñas nacidos en vientre subrogado no tienen resguardado el derecho a su identidad pues, de acuerdo a la ley chilena, la filiación materna queda determinada por el hecho del parto, de modo que, ante a la ley , el niño o niña siempre será legalmente reputado como hijo o hija de la mujer que lo da a luz, no obstante que su verdadero origen, identidad y filiación debiese corresponder al reconocimiento de la aportación del material genético y/o al reconocimiento de la voluntad procreacional de sus progenitores, excluyendo todo vínculo de filiación con la mujer que lo gesta, quien no lo hace con la voluntad de tener un hijo propio ni de formar familia con él o ella, sino para hacer posible la formación de familia de otros.

Objeto de la Moción: *Preservar la verdadera identidad biológica y/o afectiva del niño en estos casos.* Al efecto:

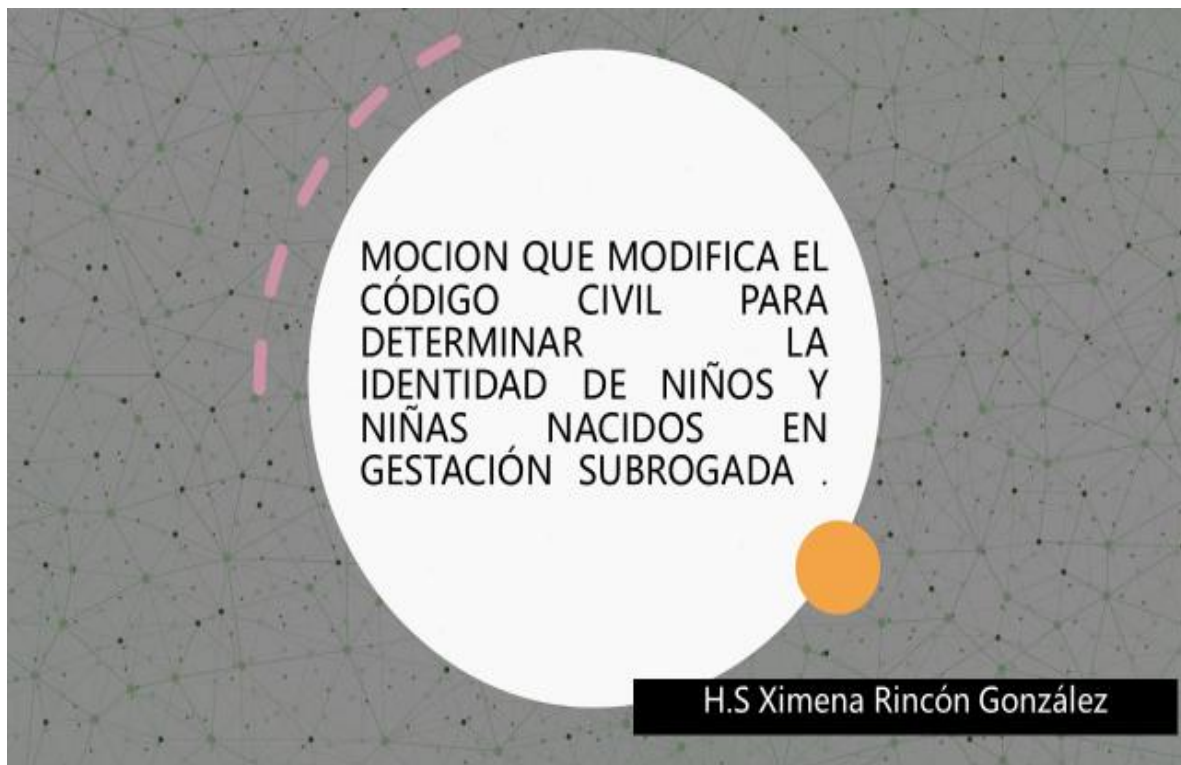
1. Se establece el criterio determinante de filiación de los niños y niñas gestado en vientre subrogado en cada caso, que de acuerdo a la ciencia médica pueden ser tres hipótesis:

- a) Los así gestados, a partir del material genético de ambos miembros de la pareja: Se establece que el factor determinante de su identidad y filiación se encuentra en el material genético de ambos progenitores que es el que da vida al embrión. No en el hecho del parto.
 - b) Los así gestados, a partir del material genético de sólo uno de los miembros de la pareja: Se establece que el factor determinante de su identidad y filiación es, por un lado, el material genético del miembro hábil para aportarlo, y por el otro, la no coincidencia genética con la mujer en cuyo vientre se gestó.
 - c) Los así gestados, a partir del material genético de terceras personas. En este caso, la identidad del niño o niña, evidentemente, no tiene base biológica respecto de ninguno de sus progenitores. El factor determinante de su identidad y filiación es la voluntad procreacional consensuada de la pareja que ha decidido traerlo a la vida, manifestada formalmente antes del procedimiento de transferencia del embrión al útero de la gestante sustituta, explicando el origen de ese embrión.
2. Se fijan supuestos legales básicos para que rijan las presunciones de filiación antes referidas. A saber:
- a) Que la técnica de transferencia embrionaria se use por progenitores que padecen de inviabilidad uterina o biológica.
 - b) Que los médicos tratantes certifiquen dicha circunstancia, así como el origen de los gametos que forman el embrión.
 - c) Que los progenitores y la gestante manifiesten voluntad jurada ante notario público de procesar y gestar de modo altruista, antes del procedimiento.
 - d) Que la gestora es una persona adulta y no puede, a la vez, ser donante de los óvulos que forman el embrión.

Fundamentos Jurídicos

1. Obligación del Estado de respetar los derechos de los niños, sin discriminación.
2. Derecho a la Identidad.
3. Derecho a la consideración primordial de su interés superior.
4. Deber del Estado de hacer efectivo de los derechos.

IV. PRESENTACIÓN POWER POINT

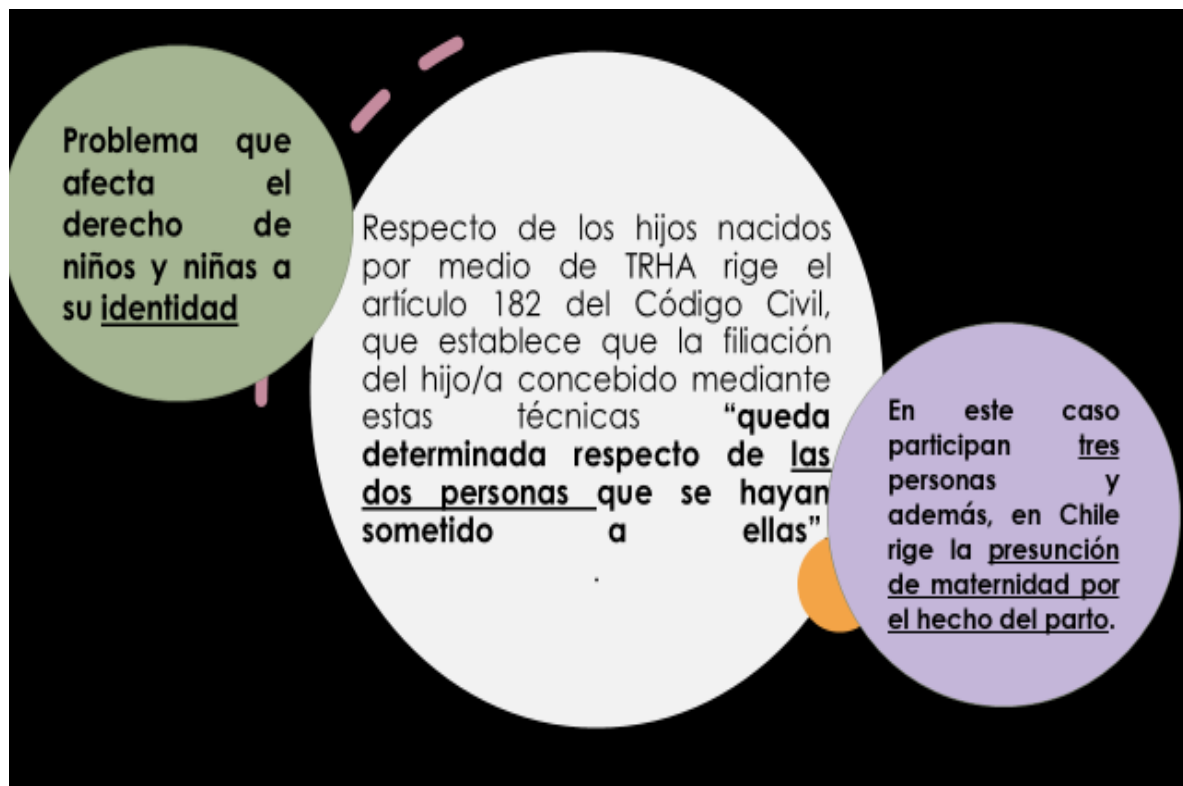


Antecedentes

Las TRHA son el conjunto de técnicas que facilitan o sustituyen los procesos naturales que producen un embarazo. Incluyen todos los procedimientos sobre la manipulación de ovocitos, espermatozoides o embriones humanos posibles para lograr un embarazo.

Una de ellas, es la fertilización asistida con transferencia embrionaria en el vientre de una tercera persona, o procedimiento de gestación por sustitución.

En Chile no existe una ley de reproducción humana , y por los mismo , no se ha regulado nada específico sobre la posibilidad de celebrar pactos de maternidad por subrogación, requisitos o modalidades permitidas y/o prohibidas. No obstante , en la practica en Chile hay personas que junto a sus parejas se han sometido a esta técnica y han concebido una niña o un niño



Objeto de la Moción

La regla del 182 del CC vulnera el derecho a la identidad pues el niño o niña siempre será legalmente reputado como hijo o hija de la mujer que lo da a luz, no obstante que su verdadero origen, identidad y filiación debiese corresponder con el de las personas que aportan el material genético y/o manifiestan su voluntad procreacional al someterse a la técnica, excluyendo todo vínculo de filiación con la mujer que lo gesta, quien no lo hace con la voluntad de tener un hijo propio ni de formar familia con él o ella, sino con el fin de colaborar para que esas personas puedan formar su familia.

Preservar la verdadera identidad biológica y/o afectiva del niño/a

No busca autorizar ni prohibir los pactos de maternidad subrogada, sino **velar por el interés superior del niño o niña**, armonizando el Código Civil con la Ley de Garantías (Art.26)

Contenidos

1. Se establece el criterio determinante de filiación de los niños y niñas en cada una de las hipótesis posibles.

1. Si son gestados a partir del material genético de ambos miembros de la pareja: el factor determinante de su identidad y filiación se fija en el material genético de ambos progenitores que es el que da vida al embrión. No en el hecho del parto.

2. Si se gestan a partir del material genético de sólo uno de los miembros de la pareja: el factor determinante de su identidad y filiación se fija, por un lado, en el material genético del miembro hábil para aportarlo, y por el otro, en la no coincidencia genética con la mujer en cuyo vientre se gestó.

3. Si nacen a partir del material genético de terceras personas, la identidad del niño o niña, evidentemente, no tiene base biológica respecto de ninguno de sus progenitores. El factor determinante de su identidad y filiación es la voluntad procreacional consensuada de la pareja que ha decidido traerlo a la vida, manifestada formalmente antes del procedimiento de transferencia del embrión al útero de la gestante sustituta, explicando el origen de ese embrión.

2. Se fijan supuestos legales básicos para rijan las presunciones filiación antes

Que la técnica de transferencia embrionaria se use por progenitores que padecen de inviabilidad uterina o biológica.

Que los médicos tratantes certifiquen dicha circunstancia, así como el origen de los gametos que forman el embrión.

Que los progenitores y la gestante manifiesten voluntad jurada ante notario público de procesar y gestar de modo altruista, antes del procedimiento.

Que la gestora es una persona adulta y no puede, a la vez, ser donante de los óvulos que forman el embrión.